



PRECIO
S/. 1.00

Lucha Indígena

LLAPA RUNAQ HATARIYNiN

Director: HUGO BLANCO

AÑO 7 - Nº 75 - noviembre 2012

CAJAMARCA: AÑOS DE LUCHA



CONSULTA RECHAZA MINERÍA EN CAÑARIS

*CONFLICTOS EN LA AMAZONÍA

*Loreto: Sin remediar daños ambientales no hay consulta

*Militares yanquis en el Perú

*Crece terrorismo de Estado

*Pueblo europeo lucha contra medidas económicas

*Matanza de indígenas K'iche' en Guatemala

*Solidaridad con los zapatistas

*Chile 61% de ausentismo electoral.

¡Agua!

El agua de las lagunas, pantanos y aguajales de las alturas, desciende subterráneamente y brota a diferentes alturas en 600 manantiales que dan agua para beber y nutren la agricultura y ganadería de miles de familias que trabajan con ella. Esa agua origina ríos de cinco valles y termina su recorrido en dos océanos, Pacífico y Atlántico.

El gobierno sirviente de la empresa quiere que creamos la estupidez de que todo ese rico sistema hidráulico de Pachamama puede ser sustituido por grandes tinas de cemento que está comenzando a fabricar la empresa para recoger el agua de lluvia. No nos dicen si pondrán 600 cañerías a diferentes alturas para sustituir los manantiales.

Continúa la lucha por la vida:

Por un lado: Humildes campesinos peruanos que necesitan el agua para vivir, para continuar trabajando la tierra y criando animales.

Por el otro: Una gran empresa transnacional encabezada por la poderosa norteamericana Newmont, especialista en ganar millones de dólares matando poblaciones en América Latina y África. Le sirve de rodillas el presidente que subió con los votos de quienes lo eligieron por haber prometido en forma enérgica defender el agua contra el oro. Otros sirvientes son: El ejército, la policía, los grandes medios de comunicación, el Poder Judicial, la mayoría parlamentaria.

Los poderosos del país están a favor del atropello, pues saben que aplastando Cajamarca será fácil aplastar a quienes se defienden contra todo tipo de abusos. Desgraciadamente gran parte del pueblo peruano, especialmente la población capitalina que, obedeciendo las órdenes de los medios de comunicación de los patrones, todavía cree que los cajamarquinos están equivocados porque la mina «les traerá el progreso».

Es la guerra de los millones de dólares contra la sed y el hambre de un pueblo. La desesperación de los sedientos ha dado un gran paso adelante con la subida de los hermanos y hermanas de Celendín al borde de la laguna Azul, que es una de las maravillas naturales que sería asesinada por la empresa y su gobierno sirviente. La policía «peruana» les enfrenta en forma amenazante, sirviendo, como siempre, a los millones de los gringos contra la sed y el hambre peruanos.

El Poder Judicial acaba de lanzarse contra una familia humilde que fue golpeada y maltratada por no arrodillarse ante la empresa extranjera criminal.

Desgraciadamente parte del ataque viene de quienes dicen dirigir la lucha del pueblo:

Wilfredo Saavedra ha difundido por la prensa capitalina su sentencia: «El Comando Unitario de Lucha ya no es el organismo dirigente, ahora lo son quienes cuidan las lagunas». Lo que no dice es que precisamente dos de los tres miembros del Comando Unitario de Lucha (Milton Sánchez de Celendín y Edy Benavides de Bambamarca- Hualgayoc) estaban cuidando las lagunas mientras él estaba tranquilamente en la ciudad.

Los combatientes también se preocupan de la probabilidad de un acercamiento entre el partido Patria Roja y el gobierno, muestran los siguientes indicios: La provincia de Cajamarca, que sería una de las tres más afectadas por el proyecto junto con Celendín y Hualgayoc, no va a las lagunas. A pesar de haberlo ofrecido, hasta ahora el gobierno regional no convoca a referéndum para que el pueblo muestre que está contra Conga. Este método de lucha fue iniciado en el mundo por Tambogrande, Piura y seguido exitosamente en otros países por combatientes antiminereros. También lo aplicaron triunfalmente Ayavaca y Huancabamba en Piura. El referendo serviría para mostrar al pueblo peruano y al mundo, que Cajamarca NO QUIERE MINA. A ese pueblo a quien engañan los grandes medios de comunicación, los que nos dicen que «el movimiento anti-Conga son sólo algunos, impulsados por Santos que quiere ser candidato». Otro indicio que les alarmó fue el prematuro levantamiento de la huelga del SUTEP por su dirección.

Por encima de todas sus preocupaciones y contratiempos, los combatientes del agua prefieren morir de un balazo que de sed.

Las comunidades que serían directamente afectadas por el proyecto, que son las que principalmente están cuidando las lagunas, organizan una marcha a Lima, encabezada por el alcalde de su distrito, los dirigentes de las rondas campesinas y frentes de defensa, los tenientes gobernadores. Llegando a Lima darán una conferencia de prensa en la que mostrarán la dramática situación que les espera de continuar desarrollándose el proyecto Conga.

Esperamos que el pueblo peruano ofrezca su solidaridad comprendiendo que el aplastamiento de la lucha por la vida en Cajamarca afectaría a toda la población peruana que sería aplastada por la voracidad del gran capital transnacional y sus sirvientes peruanos: Gobierno, Parlamento, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía, Medios de Comunicación, etc.

Concesiones otorgadas a la minería se duplicaron entre el 2006 al 2010

Por Magali Zevallos

Presentan el VII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú: «Más de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir 16.73%».

El VII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presenta un balance de la expansión minera en el Perú, con el nuevo mapa político regional y municipal -en las regiones que son mineras o donde pretende ingresar la minería- han sido elegidos autoridades regionales que han cuestionado el rol de esta actividad, como: Cajamarca, Cusco y Junín, y en el caso específico de Piura, ha planteado dos temas: «no a la minería en cabecera de cuenca» y el «respeto a los resultados de las consultas ciudadanas».

Este nuevo escenario político coloca en el debate las competencias de los gobiernos regionales sobre el otorgamiento de concesiones mineras. Actualmente, son dos presidentes regionales electos (Piura y Cusco) que han pedido facultades sobre el tema de otorgamiento de concesiones, y que las regiones no pueden seguir al margen de decisiones de gran impacto local y regional.

El resultado de estas elecciones, justamente en lugares mineros, demuestra que los conflictos no sólo se deben a temas económicos (recaudación del canon), «lo social y ambiental son temas importantes para las poblaciones», señala Jose De Echave, Coordinador General del Observatorio.

En el caso de Cajamarca, con la victoria de Gregorio Santos, una de las regiones mineras más ricas de Perú, que alberga las principales reservas de oro, puso en guardia a las empresas que operan en la zona y que mantienen una relación tensa y conflictiva con las comunidades locales. Así, se presenta un nuevo panorama político al presidente García para el último semestre que le queda por gobernar. El actual régimen es un gran impulsor y promotor de la actividad minera, bajo el slogan Perú país minero, las concesiones otorgadas a esta actividad se duplicaron entre el 2006 al 2010, pasando de 11 millones de hectáreas a más de 21 millones de hectáreas de territorio concesionado. En los últimos seis meses estas concesiones han aumentado en aproximadamente 1,5 millón de hectáreas. Según el informe OCM segundo semestre 2010, más de 21 millones de hectáreas del

territorio peruano se encuentra concesionado, es decir el 16.73%, alcanzado un nuevo récord histórico de concesiones mineras que ocupan gran parte del territorio nacional, siendo Arequipa la región más concesionada por extensión (hectáreas) del país, con más de dos millones setecientos mil hectáreas. Puno ocupa el segundo lugar y le sigue Cajamarca.

«No pretendemos afirmar que la totalidad de las concesiones otorgadas en el Perú se vayan a convertir en operaciones mineras. Sin embargo, estas concesiones representan un derecho que se entrega a las empresas y que desde un inicio ejercen presión sobre los territorios y los recursos que existen. La evidencia demuestra que muchos conflictos mineros se gestan en la fase inicial de las actividades de las empresas», dice De Echave.

Las concesiones en las zonas que son materia de estudio para el Observatorio de Conflictos mineros, con cifras a noviembre de 2010, Apurímac es porcentualmente el más concesionado: 55%, Cajamarca: 45.5%, Piura: 28.5%, Junín: 24.6%, Cusco: 16.4%.

A mayor expansión más conflicto enfatiza De Echave, hace referencia al último reporte (noviembre) de la Defensoría del Pueblo, «se registraron 120 conflictos socioambientales, un 70% tenían relación con la actividad minera». Responde que eso se debe a que las poblaciones y comunidades tienen una mayor conciencia de sus derechos.

El informe OCM sostiene que una herramienta clave que permite prevenir este tipo de conflictos es el ordenamiento territorial, el proceso participativo de Zonificación Ecológica Económica y el uso de los recursos como el agua y la tierra. «El rol de las nuevas autoridades debe orientarse a garantizar que no se afecte el acceso al agua (en cantidad y calidad) de la población y que las negociaciones de tierras se den en condiciones equitativas y justas».

El informe concluye que la agenda pendiente en minería es promover un trabajo regional que implique el respeto de los derechos de las comunidades, el cumplimiento estricto de los estándares ambientales, y la ejecución eficiente de los recursos que provengan de una actividad minera que apunte al desarrollo sostenible de las poblaciones.

LLAPA RUNAQ HATARIYNIN
Editora "Lucha Indígena" - RUC: 10060967194
Director: HUGO BLANCO GALDOS
Editor: Enrique Fernández Chacón "Cochero" Email: cefch70@hotmail.com
Camaná 983-208, Lima Cercado - Telfs: cel.9880 80679
Comité de Redacción:
Perú: Roberto Ojeda y Claudia Palomino
Vecinal: Pedro Sagástegui
Cooperacional en Europa: Pepe Mejía
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2008-01061

luchaindigenaperu@gmail.com
<http://www.luchaindigena.com/>



¿Desalojos o terrorismo de estado?

Ahora que se habla tanto del "retorno" del terrorismo, es bueno reflexionar sobre lo que esta palabrita significa, después de todo no se trata de un retorno sino de una prolongación de la guerra. No sólo la que se expande del VRAE a Echarate, cerca de Camisea, ni la presencia impune del Movadef (nuevo rostro de Sendero Luminoso), sino la que desde el Estado reprime las protestas sociales a sangre y bala. El terrorismo de Estado está muy presente.

El 28 de setiembre, un brutal desalojo se produjo en la ciudad de Cusco. Pobladores de un asentamiento humano que habían invadido la zona arqueológica de Wimpillay, fueron desalojados entre bombazos y maquinarias que destruyeron sus viviendas. Los que pidieron el operativo fueron la Dirección Regional de Cultura, los mismos que no hacen nada contra atentados contra el patrimonio como construcciones de hoteles o la ocupación de otra zona arqueológica por parte de periodistas amarillos, para colmo se presentó la acción como "impecable". Es cierto que hubo tráfico de terrenos y ocupación de una zona intangible, pero nada justifica presentar la violencia como un hecho "impecable".

El 10 de octubre, una protesta estudiantil fue reprimida brutalmente por la policía en Huaraz, dejando varios heridos. Los estudiantes reclamaban contra el rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) Dr. Dante Sánchez



Rodríguez, por ser artífice de la Ley 29914 en su artículo 7, que daba facultades a las universidades públicas para financiar los ascensos de los docentes universitarios. Este señor permitió el ingreso de policías que reprimieron a los estudiantes dentro de la universidad, en los días siguientes la protesta creció, los estudiantes exigieron la renuncia del rector y proclamaron su vacancia, mientras algunos se declararon en huelga de

hambre finalizando el mes, para que sus reclamos sean escuchados.

El 25 de octubre la Municipalidad Metropolitana de Lima pidió que la policía desaloje a sangre y fuego el mercado de la "Parada" en el distrito de La Victoria, acción que produjo varios heridos y un muerto. Es cierto que el mercado este era controlado casi delincuentemente, es verdad que la derecha aprovechó este hecho para aumentar su campaña de demolición de la alcaldesa izquierdista Susana Villarán; pero no se puede presentar el hecho como positivo. La violencia es el último recurso. En algunas redes sociales se lamentaban por un caballo que tuvo que ser sacrificado por las heridas que le produjo el desalojo, ¿hasta dónde ha llegado la división de la sociedad peruana, que un caballo vale más que una persona?

En todos estos hechos, la policía actúa con impunidad porque hay legislación que los respalda (el Decreto 982 de Alan García, aún vigente). Sin embargo, también es importante notar que en el caso de la Parada los policías actuaron con menos violencia que cuando atacan a defensores de la naturaleza como en el caso Conga.

Protesta de pescadores

Durante miles de años los pobladores de la chala (la costa) vivieron de los peces que el mar les proporcionaba. Hoy, aunque algunas empresas pretenden lucrar de esta riqueza, aún son muchos pescadores que siguen practicando esta actividad artesanalmente, mientras otros se han convertido en obreros de las fábricas.

El 24 de octubre, más de 2000 pescadores artesanales en huelga y trabajadores de fábricas conserveras de Chimbote (Áncash), marcharon desde la Plaza 28 de Julio hasta el túnel del distrito de Coishco, donde realizaron un plantón, exigiendo la renuncia de la ministra de la Producción, Gladys Triveño y la derogatoria del Decreto Supremo N° 005 de Produce, que perjudica al sector artesanal porque ha permitido que naves de otros lugares del país pesquen en el litoral chimbotano. La norma ha provocado que 617 embarcaciones, entre ellas 150 chimbotanas, pesquen para abastecer a solo 35 fábricas pesqueras ubicadas en este puerto.

Congreso aprueba presencia militar norteamericana en Perú

A fines de setiembre, el jefe del Comando Sur estadounidense, el general Douglas Fraser, fue condecorado con la Orden El Sol de Perú en la embajada de este país en Washington. Este fue el primer indicio de la claudicación de la soberanía peruana ante la principal potencia armamentista del mundo. El Comando Sur de Estados Unidos es un órgano militar destinado al control imperialista de Latinoamérica. En Perú viene "cooperando" en el conflicto valle del Vrae, donde se registra una fuerte actividad insurgente y narcotraficante.

El jueves 18 de octubre, el Congreso peruano aprobó el proyecto de resolución que autoriza el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al país para noviembre. Los militares extranjeros son efectivos de Infantería de Marina y de Fuerzas Especiales que, junto a militares peruanos, realizarán actividades de entrenamiento de campo. El congresista José Urquiza, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y ex ministro de Defensa, explicó que la autorización es para todo el mes de noviembre y que responde a un cronograma establecido para el ingreso de tropas extranjeras al territorio peruano.

El gobierno de Ollanta Humala, que se sigue llamando "nacionalista" no sólo continúa entregando los recur-

sos naturales a las transnacionales, sino que pone en riesgo la soberanía del país, que estaría quedando prácticamente intervenido por la principal potencia armamentista del mundo. No es coincidencia que previamente, el gobierno haya permitido crecer el narcotráfico y a Sendero Luminoso en la zona del Vrae y que estos se extiendan hasta Kephashiato y Kiteni, zona controlada por el Consorcio Camisea, y así militarizar la zona, evitando que la población se entere de las operaciones del consorcio, construyendo ductos cuestionados por la población matsiguenga y de todo el Macrosur.



El indulto es un insulto

El 10 de octubre los hijos de Alberto Fujimori—condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción— pidieron el indulto alegando que su padre padece de cáncer y su estado de salud corre riesgo por estar en reclusión. Esto fue desmentido por los médicos que dijeron que no padecía cáncer, aún así insistieron con el tema, ocupando a su vez todos los medios de comunicación y agitando las redes de internet. Por un lado, el fujimorismo exige se libere al ex dictador y, aunque reconocen los delitos por los que fue juzgado, los consideran simples excesos. Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos, colectivos y organizaciones sociales advierten al presidente Ollanta que no libere a este criminal, pues no existe posibilidad legal para el indulto en casos de lesa humanidad, como lo

fueron los crímenes por los que hoy purga condena en una cárcel dorada.

El día 26, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia notificó al expresidente Alberto Fujimori que debe firmar la solicitud de indulto humanitario que presentó su familia, ya que así lo establece el reglamento respectivo. De realizarse el indulto, Ollanta estaría completando su traición a las promesas que hizo en campaña y se evidenciaría una alianza en el poder entre el fujimorismo y el nacionalismo, tal como fue en el gobierno anterior entre el fujimorismo y el APRA. También es bueno recordar que estas noticias le son muy útiles al gobierno para distraer la atención de los medios y los ciudadanos ante otras cosas de mayor trascendencia y que se quieren hacer pasar "entre gallos y medianoche".

Resumen de conflictos en la amazonía

El Observatorio de Conflictos Socioambientales: Vigilante Amazonico, presentó un informe en el marco del proyecto «Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía», que es implementado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado en alianza otras instituciones (incluida la agencia USAID de Estados Unidos, lo que muestra que no se trata de «oposidores al desarrollo»).

Este informe da cuenta de los principales conflictos que hay en la amazonía peruana:

En la región Amazonas, las concesiones a la compañía minera Afrodita y otras empresas cerca a la Cordillera del Cóndor, como la petrolera Maurel et Prom, han generado la resistencia del pueblo Awajún, que a la vez se han enfrentado al Estado peruano, pues éste estableció el Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, pero ha concesionado tierras a la actividad minera en la misma zona.

El pueblo Wampis se ha visto amenazado por la petrolera Maruel et Prom, pues el lote 116 se superpone

a la Zona Reservada Santiago Comaina (en el 36.6% de su extensión) y a la Reserva Comunal Tuntanain (48.5 %). En la provincia de Condorcanqui el lote se superpone a



90 comunidades nativas, en la provincia de Bagua se superpone a 12 comunidades tituladas.

El pueblo Ashaninka con la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) a la cabeza protesta contra la contaminación minera, la tala ilegal y la demora en los procesos de ampliación y titulación en las comunidades indígenas en las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa. En el territorio Ashaninka se superponen los lotes 57 (REPSOL), 131 (CEPSA Perú S.A.),

108 (Pluspetrol), 58 (Petrobras Energía Perú S.A.), y 174 (Tecpetrol lote 174 S.A.C.).

El pueblo Kechua de Maynas, en la cuenca media y baja del río Napo, realiza reclamos y denuncias públicas por las constantes incursiones de dragas que extraen oro de manera ilegal del río Napo. El Estado ha otorgado el derecho de superficie de áreas en la provincia de Maynas, que se encuentran bajo titularidad de la empresa Perenco, que podrá instalar un campamento de construcción y realizar operaciones en plataforma de perforación, hasta el 2031.

El pueblo Kechwa de la región San Martín está vigilante a la conformación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), pues en ese proceso los pobladores han visto restringido su acceso a zonas importantes para su subsistencia. Las federaciones Kechwas de San Martín desean formar parte de la gestión de la ACR-CE y participar en la actualización del Plan Maestro 2012.

Continúa invasión de empresas brasileñas

Representantes de 15 empresas brasileñas de Minas Gerais de sectores como alimentos y bebidas, hogar y construcción, electrónica, maquinaria y equipo, productos farmacéuticos, biotecnología, salud, entre otros, iniciaron una rueda de negocios con empresarios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el 24 de octubre, en el Foro y Rueda de Negocios Perú Brasil (Minas Gerais).

Las empresas peruanas con mayor participación en el mercado brasileño son minera Parapanema (Grupo Brescia), el grupo ACP, Ajegroup, Industrias San Miguel e Interbank, es decir la argolla de empresarios que explotan nuestros recursos en complicidad con empresas transnacionales. Asimismo, entre los proyectos brasileños en Perú destacan Votorantim y Odebrecht, este con proyectos en carreteras, obras de irrigación, de energía y en el Gasoducto Andino del Sur. Igualmente, ha iniciado la construcción de la hidroeléctrica Chaglla en Huánuco. Estas empresas estuvieron comprometidas con la corrupción del gobierno de Alan García.

Shipibos continuaron la toma de pozos petroleros

Desde el 3 de setiembre, los pobladores de la comunidad shipiba de Tres Islas, en Loreto, tomaron nueve pozos y el ducto petrolero de la empresa Maple Gas, debido a que ésta no quiso reconocer el estudio de valoración ambiental que levantó para los comuneros el consultor Juan Aste. Desde ese día, cada doce horas se relevan en esta tarea un grupo de 90 personas. Avisaron que no dejarán los pozos hasta que el gobierno instale una comisión de alto nivel con capacidad resolutoria, pero ni la policía, ni la Fiscalía han intervenido.

Paro en el día de la Dignidad Loretana

El 24 de octubre se conmemora el Día de la Dignidad Loretana, en la región más grande de la amazonía peruana. Por tal motivo, este año en esa fecha se realizó un paro de 24 horas, convocado por el Frente Patriótico de Loreto (FPL), en cuya plataforma de lucha resaltó la defensa del agua, la vida, recursos naturales y el medio ambiente. El Frente Patriótico reafirmó su decisión de defender los recursos hídricos, especialmente en la cuenca del Nanay que se encuentra amenazada por las operaciones petroleras



que se realizarán en los lotes 123 y 129, donde hasta mediados del presente año se realizaron operaciones de exploración a cargo de la empresa Conoco Phillips, la misma que luego de las acciones de defensa de la cuenca del Nanay que han desarrollado diversas organizaciones sociales agrupadas en el Comité del Agua, decidió desprenderse de sus acciones, iniciando un proceso de transferencia a Gran Tierra Energy.

Además, los iquiteños cuestionan que se pretenda explotar petróleo en una zona ambientalmente sensible, la misma que se encuentra protegida pues forma parte del Área de Conservación Regional Alto Nanay - Pintuyacu - Chambira.

Pueblos exigen remediar contaminación antes de nueva consulta

El lote petrolero 1AB tiene cuarenta años de antigüedad y es el de mayor producción con 15 mil barriles de petróleo por día. Se encuentra en los distritos de Andoas, Trompeteros y Tigre, en Loreto. La contaminación de suelos y ríos a raíz de esta actividad extractiva generó conflictos que derivaron en toma de campamentos y pozos. Hubo firmas de actas que se cumplieron a medias.

El actual concesionario es Pluspetrol, su contrato concluirá en el 2015. Ante esta situación, el ejecutivo ha programado la primera consulta previa antes de la licitación del lote 1AB, ahora llamado Lote 192, que se realizaría en marzo de 2013.

Dirigentes de las organizaciones nativas Orpio, Corpi, Fediquep, Acodecospat, Feconat, Feconaco y Chapi-Shiwag, que agrupan a 17 comunidades amazónicas que están en el lote petrolero y que serían impactadas indirectamente, exigen la remediación de los pasivos ambientales y la indemnización y compensación por el uso de sus tierras y el daño ocasionado por la actividad hidrocarbúrfica a lo largo de cuarenta años, así como el cambio del ducto petrolero y el recojo de desechos.

También exigen que la consulta debe realizarse antes de la licitación, que ya ha sido anunciada. De no resolverse sus exigencias, según el acuerdo de los pueblos quechuas, kichuas y achuar que habitan las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, iniciarán acciones le-



gales en instancias nacionales e internacionales con el fin de hacer valer sus derechos.

Una delegación de apus achuar representantes de Feconaco, se reunieron con el Viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra. A quien le expresaron a grandes rasgos su posición en torno a la consulta y la licitación, aclarando que no aceptarán una nueva concesión si es que antes no se remedia la contaminación existente en el lugar.

Conga: un año de lucha y ejemplo

Los pobladores de Celendín y Hualgayoc continúan con la resistencia al inviable proyecto minero Conga. Desde el 6 de octubre los guardianes de las lagunas permanecen custodiando sus fuentes de agua cerca, combatiendo el hambre y el frío, cuidando la salud de niños y ancianos que decidieron participar en la protección de su entorno. Cada tres días existe un revelo de más de 500 ronderos en la zona de influencia minera, enfrentando una constante intimidación de la policía y la seguridad privada de Yanacocha, o por comunidades que han sido movilizadas por la mina. La prensa controlada por la mina lanza también constantes calumnias contra los defensores de las lagunas y presentan las acciones en su contra como manifestaciones "espontáneas" de la población. Pero los «defensores del agua» han recibido el respaldo de diversas organizaciones nacionales y mundiales.

El 24 y 25 de octubre se realizó un paro en Cajamarca, que fue masivo y pacífico, como parte de toda la resistencia que lleva ya casi un año. Mientras tanto, las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca han presentado una petición y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

para que el Estado no imponga el megaproyecto Conga mediante la violencia (militarización, represión, muertes), dado que la concesión nunca fue consultada y el megaproyecto no cuenta con el consentimiento de los pueblos indígenas afectados.

Las rondas campesinas surgieron el año 1976 para controlar el problema del abigeato y hacer justicia en esos lugares donde no llegaba ningún tipo de justicia, a la larga se convirtieron en la organización que recuperó los valores comunitarios que se habían debilitado en la zona. Ahora, con casi 20 años de actividad minera de fuertes impactos sociales y ambientales, las rondas encabezaron la lucha contra lo que algunos denominan el "abigeato del agua", el intento de robarles sus lagunas y bofedales por parte de la ambiciosa empresa minera Yanacocha. Pero no solo las rondas, los campesinos y pobladores urbanos, artistas y estudiantes, organizados en varios frentes de defensa provinciales y regionales, que han logrado mantenerse en un Comando Unitario de Lucha que los in-



cluye a todos, dentro de sus diversidades y diferencias, constituyendo un ejemplo para todos los pueblos.

Poder Judicial sometido al gobierno encubridor de asesinos

De La República 28 de octubre

«El Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojasi días antes de que elaborara la sentencia del juicio Chavín de Huantar. El acuerdo equivale a una destitución.»

El motivo fue que sostuvo que en el operativo Chavín de Huantar contra el MRTA, el emerretista Eduardo Cruz Sánchez (Tito) fue asesinado («ejecutado extrajudicialmente»).

Otra vez más queda demostrado que la «Independencia del Poder Judicial» sólo es un cuento..

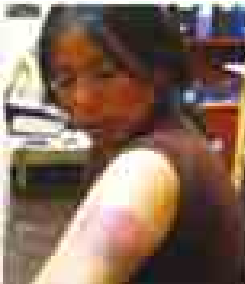


Yanacocha quiere desalojar a humilde familia Chaupe

La familia Chaupe-Lozano tiene un predio denominado "Tragadero Grande" desde 1994, ubicado en Sorochuco, dentro de la concesión del proyecto minero Conga. En Mayo del 2011 la empresa minera Yanacocha sorprendió a esta familia presentándose en su terreno con maquinaria pesada pretendiendo realizar una trocha carrozable, les destruyeron la choza donde vivían, los golpearon e incluso se llevaron sus humildes enseres. A la intemperie se quedaron en su terreno, sus familiares y vecinos los ayudaron con una carpa y comida. La familia Chaupe denunció ante la fiscalía de Celendín a la empresa minera por este ataque y por intentar usurpar su propiedad, pero el Ministerio Público archivó su denuncia. La empresa intentó hasta en tres oportunidades desalo-

jarlos, al no poder hacerlo, Yanacocha los denunció por supuesta usurpación de su propiedad. La Fiscalía de Celendín formalizó la denuncia de la empresa minera, por lo que se inició un proceso penal contra los Chaupe. La sentencia del juez fue a favor de la empresa:

A tres años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 200 soles a favor de Minera Yanacocha, fueron condenados cuatro miembros de la familia Chaupe en el distrito de Sorochuco, región Cajamarca, por supuestamente haber usurpado propiedad de la empresa. Según la sentencia la familia tiene 30 días para abandonar el predio en disputa que forma parte del proyecto minero Conga. La misma ha sido apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.



¡EL COLMO! Newmont es reconocida como ambientalmente responsable

El 31 de diciembre de 1998 las entidades Dow Jones Indexes (el indicador con sede en Nueva York), Stox Limited (gestor del índice europeo) y SAM (Sustainable Asset Management), crearon el Dow Jones de Sostenibilidad (Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI), para evaluar empresas que cumplan los requisitos de sostenibilidad demandados. Cada año captan a las 2.500 grandes empresas de todo el mundo que quieran formar parte del índice, una vez se ha verificado que cumplen con los más de 50 criterios generales y específicos; estos últimos varían en función del sector en que operen. Con los datos recabados, se elaboran tres índices: el mundial (DJSI World), el europeo (DJSI Stox) y el norteamericano (DJSI North America). Así, esta supuesta calificación ambiental en realidad es un gran negocio publicitario, que este año ha incluido a Newmont Mining (la propietaria de Yanacocha) en su índice. Para limpiarle la cara ante la pésima imagen mundial que esta empresa se generó a raíz del caso Conga. Mientras tanto, miles de truchas del río Llaucano, en Cajamarca, fueron encontradas muertas el domingo 21 de octubre. Los indicios apuntan a que la causa sería la contaminación minera de la empresa Yanacocha.

3er Parlamento Aymara

El 13 y 14 de octubre se realizó el Tercer Parlamento Aymara en el distrito de Cojata, provincia de Huancané (Puno). Entre los acuerdos se propuso la implementación y creación de cuota de pueblos indígenas para el Congreso, que no sea por regiones, sino por circunscripción de pueblos indígenas, que en los gobiernos locales, regionales y en los diferentes ministerios se exija la participación de profesionales aymaras – indígenas, así como implementar el Plan de Desarrollo Económico del Pueblo Aymara. El evento fue organizado por la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), presidida por Mauro Cruz Layme. Como en las veces anteriores abordaron temas de cultura, política y sociedad del pueblo aymara y su presencia en el escenario peruano.

Conflictos en setiembre

De acuerdo al centésimo tercer reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, en septiembre se registraron 238 conflictos sociales, 167 tienen condición de activos (70,2%) y 71 (29,8%) se encuentran en estado latente.

En Ancash hay 32, en Puno 22, en Lima y Apurímac, y en Cusco, Cajamarca, Piura, Loreto y Ayacucho 13 en cada uno. Hay ocho conflictos nuevos: cinco socioambientales, y tres por demarcación territorial, temas laborales y electorales. Los socioambientales son el 62,6% (149 casos) del total. El texto muestra 5 conflictos resuel-

tos: dos en Cusco y Lima donde las comunidades campesinas llegaron a un acuerdo con las empresas mineras, un conflicto electoral en Ancash, también se solucionó el de los médicos del Seguro Social de Essalud y el conflicto de la construcción del aeropuerto de Chincheros. Como en agosto había 243 conflictos, algunos medios pusieron titulares como "Conflictos sociales disminuyeron en septiembre", pero una cantidad de 5 en más de 200 no es una cifra muy indicativa, solo es el sensacionalismo de los medios por hacernos creer que el país está "avanzando".

Murió víctima de Salqa Pukara

El 9 de octubre murió Justiniano Parhuayo Ramos, de más de 60 años. El es uno de los ancianos criminalizados junto a sus 2 hijos y otras familias que resistieron ceder sus terrenos de la comunidad de Pampa Anza al Proyecto Hidroenergético Salqa Pukara, que pretende construir la casa de máquinas en sus territorios. Estas personas fueron masacradas y golpeadas por 80 policías con dirigentes corruptos de la misma comunidad, producto de dichas peleas Justiniano estuvo en el hospital por los daños a sus órganos internos, lamentablemente no pudo recuperarse y murió.



ATAQUE de las transnacionales contra la humanidad

Cambio climático: La guerra del Caribe

Por Peter Richards (extractos) IPS, 9 de octubre, 2012.-

Durante el 67 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que acaba de concluir, los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) formaron un frente unido contra el recalentamiento planetario y llamaron a tomar más en serio los problemas de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés).

«Las islas de nuestro planeta están en guerra contra el cambio climático, el aumento de las temperaturas y el incremento del nivel del mar», dijo a los delegados el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. «Esta guerra no es algo que ocurrirá en el futuro, sino algo presente y en marcha. La supervivencia de nuestras islas está en juego», añadió.

La Caricom espera que, para cuando la comunidad internacional se reúna en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los SIDS, haya progresos en varias de las recomendaciones que, por ejemplo, emergieron de la cumbre de Río+20, realizada a comienzos de este año.

«El fracaso registrado hasta la fecha en alcanzar un resultado legalmente vinculante en materia de cambio climático es de grave preocupación», dijo el embajador de Dominica, Vince Henderson. «Mientras el debate continúa, los desafíos de nuestras islas se hacen cada vez mayores».

Datos divulgados por el Centro sobre Cambio Climático de la Caricom muestran que, en la última década, los daños causados por eventos meteorológicos extremos le costaron a la región medio billón de dólares.

«En términos reales, las amenazas a las posibilidades de desarrollo de la región del

Caribe son severas, y ahora se reconoce que la adaptación requerirá de una importante y sostenida inversión de recursos», dijo el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Jamaica, Roberts Pickersgill, durante un taller el martes 2 en Kingston.

Por su parte, la especialista en manejo de recursos ambientales Sandra Prescod Dalrymple coincidió en que la comunidad internacional debía sentir la obligación de apoyar al Caribe, pero señaló que los países del Norte industrializado estaban «cada vez menos dispuestos» a hacerlo.

«La región necesita aprovechar sus propios recursos y buscar innovadores esfuerzos de financiamiento en materia de cambio climático. Está claro que estamos siendo impactados por el recalentamiento



planetario y que nuestros sectores económicos sufren», señaló a IPS.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer, acaba de participar de la cumbre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), en la que afirmó: «No podemos esperar a que nuestras tierras desaparezcan».

«Debemos actuar ahora y responder a la crisis del cambio climático, asegurando que ni un solo país sea sacrificado, no importa cuán pequeño sea», afirmó.

«Se está produciendo un blanqueamiento de corales en nuestras costas, y los huracanes se hacen cada vez más severos

y recurrentes», alertó. «El anhelo de mi gobierno es que esta egoísta falta de acción se acabe en Doha, y que un resultado positivo de las negociaciones sobre cambio climático traiga nuevas esperanzas para la humanidad y compasión para nuestro planeta».

En la capital de Qatar se realizará la 18 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 18).

Por su parte, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Denzil Douglas, lamentó que los países que más contribuyen con gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario, aún no asuman sus responsabilidades por la degradación costera, el blanqueamiento de los corales, los daños de la infraestructura y la pérdida de vidas. «Es enorme la carga física, mental y financiera que el uso energético de otras naciones ha colocado sobre países como el mío, arrastrándonos a una mayor deuda y frustrando severamente nuestros esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio», dijo en la Asamblea General.

«Si bien un cambio a las energías renovables no solucionará inmediatamente la miríada de problemas causados por la economía global, basada fundamentalmente en combustibles fósiles, la adopción e una economía verde, de hecho, ayudará a frenar el espiral descendente en el que va nuestro planeta», agregó.

La ministra de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de Barbados, Maxine McClean, dijo que su país celebraba la decisión adoptada el año pasado en la COP 17, en Durban, de lanzar negociaciones sobre un nuevo acuerdo legalmente vinculante que entre en vigor a partir de 2020. Pero, señaló, un acuerdo para después de 2020 carece de significado «si no se toman acciones ambiciosas para reducir las emisiones globales y proveer financiamiento y tecnología a los países en desarrollo vulnerables».

«Esto es esencial si queremos adaptarnos a los cada vez más graves impactos del cambio climático», añadió.



ANA minimiza contaminación minera

En la región de Puno hay dos casos de ríos contaminados cerca de operaciones mineras, que sin embargo, no tendrían mayor responsabilidad según estudios de la ANA.

Cuenca del Ramis

El Monitoreo Participativo de la calidad del agua que realizó la Autoridad Nacional del Agua (ANA) entre el 19 y 23 de mayo del 2012 en 24 puntos distribuidos en los ríos Llallimayo, Santa Rosa, Ayaviri y Pucará, en la provincia de Melgar (Puno), determinó que estos se encuentran contaminados por causas naturales, por aguas residuales municipales y residuos sólidos.

En la cabecera de la cuenca del Llallimayo hay aluminio, hierro y manganeso. Esto en la quebrada Luchusani, aguas arriba de las operaciones de la empresa minera ARASI SAC. Aguas abajo hay aluminio, hierro y cobalto. En el río Pataqueña junto al vertimiento del campamento de ARASI «es de buena calidad». El agua del Chacalpa tiene aluminio, hie-

rrero, manganeso y cobre, que aguas abajo de las operaciones de la minera superan los parámetros permitidos. Aunque el informe trata suavemente a la mina, deja entender que —al menos en unas zonas— podría tener responsabilidad. Estos ríos forman parte de la gran



cuenca del río Ramis, la más extensa de los aportantes al Lago Titicaca. La contaminación de este río se da principalmente en la provincia de Azángaro y por la presencia de minería informal, la misma que generó la protesta campesina que acabó con 5 campesinos asesinados por el gobierno aprista en julio del 2011.

Pasto Grande

Es más grave la opinión de la ANA en la cuenca de Pasto Grande (provincia de Puno), dice que la contaminación que existe allí es de origen natural. Las aguas ácidas, recogidas en las muestras, se deberían a la existencia de metales naturales en la tierra de la zona. Negó que la mina Aruntani sea la causante de la contaminación, pues no desecha relaves, además la mina se encuentra en la cuenca del Océano Pacífico, en Moquegua, y los nevados que existen entre Puno y Moquegua imposibilitan que cualquier contaminación pase a la zona de Puno. Esto deja suponer que sí podría estar contaminando Moquegua.

La población de Puno, especialmente el distrito de Laraqueri, teme que la ampliación de Aruntani pueda afectar sus tierras. Este temor no se despeja con las opiniones de la ANA porque sólo explica que actualmente Aruntani no opera en la zona y por eso es imposible que contamine, sin embargo no dice nada de la ampliación que esta mina viene proyectando.

Anuncian protesta contra Antamina

El 8 de octubre, dirigentes de diversos centros poblados y autoridades de poblaciones afectadas por la empresa minera Antamina, acordaron acatar una movilización contra dicha empresa para cumpla con su promesa de resolver los problemas sociales y económicos que sufren las comunidades que están en la zona de su influencia.

Exigen inversión económica en proyectos sostenibles, puestos de trabajo, ayuda para las víctimas de la contaminación ambiental, entre otros puntos. Aún sin fecha definida, la medida de lucha se realizará en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari (Ancash).

Antamina pertenece a la australiana BHP Billinton y la suiza Xstrata (la misma de Tintaya), ha sido responsable de varios derrames y otras formas de contaminación ambiental, violando los derechos de las comunidades.



Cañaris le dijo NO a proyecto Cañariaco

El 96.9% de los comuneros de los 38 caseríos de Cañaris (casi 4000 personas), le dijeron NO al Proyecto Minero Cañariaco de la empresa canadiense Candente Copper que pretende explotare cobre, oro y plata, susceptible de afectar los derechos colectivos y territoriales de alrededor de cuatro mil indígenas quechua hablantes Cañaris. Como resultado de la Consulta Comunal realizada el día 30 de setiembre en el distrito Cañaris, Provincia de Ferreñafe región Lambayeque. Los pobladores caminaron entre 3 a 5 horas para llegar a su centro de votación, con la única consigna de preservar sus bosques húmedos, cuencas de agua, la rica biodiversidad, la agricultura que es fuente de trabajo así como las tradiciones y costumbres de su lugar.

Al acto democrático se hicieron presentes representantes del Jurado Nacional de Elecciones, Transparencia,



de la Defensoría del Pueblo, quienes garantizaron el correcto desarrollo de la votación. También estuvieron autoridades de la Región Lambayeque, del Ministerio de Agricultura, entre otras autoridades y representantes de frentes de defensa, organizaciones de derechos humanos, etc.



Cristóbal Barrios, presidente de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Cañaris, pidió al Ejecutivo respetar la decisión de los pobladores. Según el dirigente, los resultados obligan a la minera a suspender sus operaciones y todas las actividades dentro de las 16.000 hectáreas del área de concesión.

Una vez más nuestros pueblos demuestran que ya no creen en estas empresas que lucran con nuestra vida y nuestros derechos, Cañaris se convierte en un pueblo más que ha hecho escuchar su voz de rechazo a la muerte lenta con la minería y su voz de sí a la vida.

Diálogos prolongados:

Espinar

En el marco del diálogo entre la población de Espinar (Cusco) y la empresa minera Xstrata Tintaya, se establecieron tres mesas temáticas con participación de representantes de la población, del Estado y la empresa.

El 16 de octubre se reunió la mesa de medio ambiente, donde se informó los avances que viene implementando el Estado (vía la dirección Regional de Salud DIRESA) para atender las demandas de la población, las que hasta la fecha apenas se han iniciado. Los dirigentes sociales denunciaron que la empresa viene visitando a las comunidades, ofreciendo regalos y trabajo a quienes se oponen al monitoreo ambiental de la empresa.

El 17 se reunió la mesa de responsabilidad social, que acordó la formación de una Oficina de Atención y Soporte Comunitario, así como un cronograma de diálogo directo con cada una de las comunidades afectadas, el que comenzó a implementarse a fines de octubre.

Moquegua

El 26 de octubre, representantes del Ministerio de Energía y Minas, Agricultura, Medio Ambiente y PCM fueron al puerto de Ilo (Moquegua) para la segunda sesión de la mesa de diálogo entre la población de Moquegua y la empresa minera canadiense Southern. Aprobaron el reglamento y conformaron comisiones técnicas de Recursos Hídricos, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La minera, a través, de su representante Roberto Tello Yuen, decidió integrar las tres comisiones técnicas. Finalmente se aprobó el ingreso de 5 organizaciones de 13 que presentaron su solicitud, es decir que la mesa estará mayormente integrada por representantes del Estado que, como ya sabemos, respalda mayormente a la empresa.



INVADEN GRUPOS DEL PRI Y PVEM POBLADOS ZAPATISTAS

Trozo de Hermann Bellinghausen en «La Jornada»

A los desalojos por parte de partidos políticos se suman las agresiones de paramilitares

El repunte de los paramilitares en Chiapas viene acompañado por un sustrato de presuntos conflictos agrarios, la mayoría infundados pero atizados por los políticos de los partidos y funcionarios gubernamentales, y dirigidos contra las tierras recuperadas por las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la mayoría ocupadas y trabajadas por comunidades rebeldes hace 10 o 15 años. En particular grupos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y recientemente del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), usándolos como botín electoral, invaden o amagan con hacerlo, predios y hasta poblados zapatistas, aprovechando que

éstos, al mantenerse en resistencia, no tramitan ninguna titulación agraria con el Estado, pues siguen sus leyes revolucionarias a través de las juntas de buen gobierno (JBG). Un análisis al que tuvo acceso /La Jornada/ documenta estos conflictos e identifica los grupos invasores o agresores: PRI, PVEM, PRD, PAN, o bien organizaciones como Paz y Justicia En una muy reciente denuncia, Las Abejas confirmaron la reactivación en Chenalhó de Máscara roja, como se ha identificado a los perpetradores de la masacre de Acteal en 1997. También son agredidas comunidades de /la otra campaña/ (Jotolá, Mitzitón, San Sebastián Bachajón) mediante conflictos religiosos (Ejército de Dios) o diferencias ejidales.

Este es el escenario que hereda la alianza PVEM-PRI encabezada por Manuel Velasco Coello, que en breve gobernará la entidad. La mayor parte de grupos paramilitares, invasores agrarios y gobiernos municipales involucrados pertenecen a sus filas. En un análisis del investigador Arturo Lomeli se identificaron los principales lugares (no los únicos) donde se han presentado agravios y delitos no resueltos en años recientes, en especial de 2010 a 2012. Allí se apunta que a partir de 1994 fueron ocupadas entre 250 mil y 750 mil hectáreas en varios municipios. Al amparo de la rebelión zapatista, (varias organizaciones campesinas), al lado de los zapatistas, recuperaron y fundaron nuevas localidades. En 2000, cuando dirigentes de dichas organizaciones fueron incorporados al gobierno estatal

o municipal, se dieron a la tarea de regularizar los predios y como los zapatistas no entraron en esas negociaciones, las organi-

zaciones reclaman sus predios. Estas son base electoral de todos los partidos.



La Junta de Buen Gobierno de Oventic denuncia que otra provocación es robar el agua a comunidades zapatistas.

Elecciones municipales en Chile

Menos de la mitad de los electores participó en las votaciones: Solamente un 39 %, mientras que la abstención alcanzó un histórico 61 %.

Es un gran golpe para la ultraderecha gobernante que perdió en las principales ciudades.

Pero tampoco es buena noticia para la «Concertación» que gobernó anteriormente.

¿Por qué se abstiene un pueblo que tateo lucha en las calles?

Porque está llegando a la conclusión de que mediante las urnas no se liberará y que el camino hacia su liberación es la movilización.

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces)

Declaración de la Aces con respecto al resultado electoral

El movimiento estudiantil a lo largo de su historia ha ido desarrollando distintas demandas y justas reivindicaciones, las que siempre parecieran tener la misma respuesta: la traición. Es esta clase política, es su institucionalidad y su modelo ilegítimo, la que en reiteradas ocasiones nos ha dado la espalda, ha privatizado nuestra educación y ha precarizado progresivamente nuestros derechos.

Fresca está aún en la memoria, esa dichosa fotografía donde la Concertación y la Alianza al unísono levantaban las manos y daban por cerrada, espaldas del pueblo, un conflicto que

estaba recién comenzando. Son los dichos de los actuales políticos los mismos que aprobasen la ley general de educación, que en un juego circense ha intentado emular e instalarse como grandes progresistas que apoyan el movimiento social solo en el discurso, en el Congreso ni pensarlos. Son esos mismos que usufructúan de la ley SEP, desviando los fondos de nuestra educación para sostener sus moribundas alcaldías ¿Qué otro camino les quedaría, si para ellos la educación municipal no es más que la caja chica del edil de turno? He ahí por qué no quieren desmunicipalizar. Son sus políticas, sus sueldos, sus traiciones las que los alejaron completamente de la realidad en que vive la mayoría del país.

En el año 2011 lanzamos nuestra propuesta de educación, propuesta que sabíamos no haría eco ni en La Moneda, ni en el Parlamento ni mucho menos en las alcaldías. Meses después de esto el silencio parece ser ley. Vivimos así un ninguneo más de la institucionalidad hacia los movimientos sociales. Dicen tenernos como referente de opinión publica pero no es eso lo que buscamos, lo que nos convoca es la solución real a nuestras problemáticas. No buscamos pantanosas mesas de diálogo que siempre terminan pegando un portazo a nuestras demandas, pasando una vez más por sobre el conjunto de la sociedad, traicionando el voto que le regalamos cada cuatro años.

Hemos aprendido de nuestra historia, que la única manera efectiva para resolver nuestros problemas es discutiéndolos desde la base y de ahí emanando propuestas con una verdadera visión de país. No existe otra manera de exigir legítimamente nuestras demandas, que desde el mismo movimiento social en asambleas, consejos, juntas de vecinos, etc., esa es la idea del control comunitario, así como sucedió en Aysén, Freirina y

en muchos otros lugares del país y vimos como la organización dio resultado. Tenemos bien claro que la clase política no cederá, es por eso que no buscamos eco en la institucionalidad ni en sus representantes, lo buscamos en el ciudadano común, en el trabajador, en el poblador, en el estudiante, en el pueblo de Chile.

Estas elecciones confirman la crisis institucional en nuestro país que dentro del movimiento social se denuncia. Los estudiantes no hemos sido más que la punta de lanza de millones de chilenos que ya no creen en una institucionalidad impuesta a sangre y fuego y perpetuada a costa de nuestros derechos.

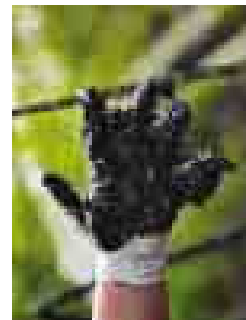
El rotundo triunfo de la abstención como alternativa de construcción puede ser visto por muchos con recelo, pero esto demuestra una vez más el desgaste de un sistema que nació podrido. No nos adjudicaremos la abstención como resultado a nuestro llamado, pues creemos que los chilenos han sabido darse cuenta da la falsedad de esta democracia y sus instituciones.

Insistiremos y trabajaremos para que el movimiento social en toda su magnitud se articule, se empodere y se organice. Con el ejemplo de Aysén, Freirina, Dichato, los deudores habitacionales, portuarios, los pescadores artesanales, pobladores, estudiantes y trabajadores en general, construiremos la verdadera democracia.

28 de octubre de 2012
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces)

Corte Suprema falla a favor de no bloquear la multa de 18.000 millones de dólares impuesta a Chevron por la contaminación en Ecuador

La Corte Suprema confirmó el fallo de un tribunal de menor jerarquía que denegó al gigante petrolero Chevron su intento de impedir que se le aplicara una multa de 18 mil millones de dólares por contaminar la selva de Ecuador desde la década de 1970. Los habitantes de la Amazonia obtuvieron el fallo el año pasado, tras una prolongada causa en la que se reclamaron daños y perjuicios a Chevron por haber arrojado miles de millones de galones de residuos petroleros tóxicos. El fallo inicial imponía el pago de 8,6 mil millones de dólares a la empresa, pero como ésta no pidió disculpas la cifra aumentó a más del doble. Chevron estaba apelando el fallo de un tribunal menor que rechazaba una orden judicial obtenida por la compañía para impedir la sanción.



Brasil: Indígenas guaraní-kaiowás afirman que defenderán sus tierras con la vida

Los indígenas habitan la Hacienda Cambará, próxima a la reserva indígena Pyelito Kue, en la jurisdicción de Iguatemi, estado de Mato Grosso do Sul, cerca a la frontera con Paraguay. Hace diez días, los indígenas fueron notificados de una orden de desalojo en las márgenes del río Joguico, una zona considerada ancestral.

En respuesta a eso mandaron un mensaje:

"Concluimos que vamos a terminar muriendo en poco tiempo porque no tenemos ni tendremos perspectivas de vida digna y justa ni aquí ni lejos de aquí. Por favor, de una vez por todas, a promulgar nuestra aniquilación y la extinción total, además de enviar varios tractores para cavar un agujero grande para jugar y enterrar nuestros cuerpos. Ahora es-

peramos la decisión de la Corte Federal. Declaramos nuestra muerte colectiva del guaraní y kaiowá Pyelito Kue / Mbarakay y enterrarnos aquí."

Los indígenas afirman que están dispuestos a morir por defender sus tierras de los "sicarios contratados por terratenientes" quienes intentan expulsarlos de sus territorios ancestrales.

El suicidio entre los Guaraní-Kaiowá es un hecho que ocurre desde hace tiempo en la comunidad, sobre todo entre los más jóvenes.

Entre 2003 y 2010, 555 indígenas se suicidaron en la comunidad. La causa suele ser la pérdida de las tierras tradicionales y la vida en campamentos al margen de las carreteras.

La guaraní es la segunda mayor etnia de Brasil (43.000 miembros).



Brasil: indígenas suspenden construcción de represa Belo Monte

En Brasil, grupos indígenas ocuparon la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la selva amazónica y provocaron así la interrupción de las obras. El proyecto de construcción de la represa de Belo Monte, de 11 mil millones de dólares, fue inicialmente aprobado a pesar de las objeciones de las comunidades indígenas, que han presentado varias impugnaciones en las que se invocan preocupaciones

ambientales y el temor a desplazamientos masivos. Las tareas de construcción se reanudaron el mes pasado luego de haber estado suspendidas mientras se resolvían los recursos interpuestos. El grupo Amazon Watch afirma que docenas de activistas indígenas que se unieron a la ocupación de 24 horas acusan al consorcio constructor que está detrás del proyecto de infringir los acuerdos.

Las "ciudades modelo" de Honduras

Será un territorio con sus propias leyes, su sistema tributario, su política de inmigración y su policía. Será una especie de isla dentro de un país soberano. Se llamará «ciudad modelo». Y quedará en Honduras.

La mayoría parlamentaria de derecha, heredera del golpe, ha aprobado una ley que contraviene la soberanía del país.

La ciudad quedará a sus anchas para gobernarse, administrarse, firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley (como tribunales y policía), hacer su presupuesto y hasta contratar sus propias deudas internas o externas, sin el aval del Estado de Honduras.

Al parecer la burguesía hondureña, previendo que ha de perder en las próximas elecciones, prepara el separatismo enmascarado, la «independencia» de las «ciudades modelo» para cobijarse en ellas

Chile: Mapuches levantan huelga de hambre tras anulación de condena

Servindi

La Corte Suprema chilena anuló el martes la sentencia de 10 años de cárcel a un indígena mapuche y redujo la pena a otro. Ambos pertenecían a un grupo de cuatro indígenas que llevaban 59 días de huelga de hambre en protesta por sus condenas.

Los mapuches fueron sentenciados por intento de homicidio de un general de la policía durante un operativo policial y por portar armas. Los delitos imputados fueron cometidos en agosto y noviembre de 2011 en una región al sur de Chile llamada la Araucanía. Ambos nativos pertenecían a un grupo de cuatro presos mapuche que inició una huelga de hambre en la cárcel Angol -unos 600 kilómetros al sur de Santiago- en protesta por sus condenas.

Levinao Montoya, a quien se anuló la condena de diez años y un día de cárcel, se le ordenó un nuevo proceso por la «la



falta de fundamentación del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol».

Por otra parte, a Levipán Coyán se le puso una sentencia de reemplazo de tres años de prisión que podrá cumplir en libertad, al no acreditarse su intención de matar al policía que falleció por un disparo suyo durante un enfrentamiento. Tras la medida, el grupo levantó la huelga de hambre de 60 días al ver atendido uno de sus principales requerimientos, «la rebaja de condena y anulación

del juicio de Levinao», señalaron a la prensa.

Montoya y Coyán fueron procesados por el Código de Justicia Militar, cuyas penas son considerablemente más severas respecto a la legislación para civiles.

Los dos pertenecen a la comunidad Wente Winkul Mapu que lucha por recuperar 2.500 hectáreas de tierras -actualmente en manos de una empresa forestal- que consideran de su propiedad, por derechos ancestrales.

Panamá se rebela contra la privatización de la Zona de Libre Comercio del Canal

Según la ley que creó la Zona de Libre Comercio, de propiedad del Estado, éste alquilaba lotes a los comerciantes, quienes construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).

Ahora la Asamblea de Diputados aprobó la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC).

En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Ricardo Martinelli salió del país con destino a Japón. La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal.

El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales, responsabilizan

al presidente por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.

Colón está sin escuelas, con toque de queda y huelga empresarial. La represión a las protestas contra la Ley Martinelli, ha causado tres muertes, una de ellas de un niño de nueve años. Hay decenas de herido y detenidos.

El dirigente del Frente Amplio por la Democracia en Colón, dijo que la huelga general es en toda la provincia y la totalidad de las organizaciones participarán y lucharán hasta las últimas consecuencias a fin de que la Ley 72 sea derogada.

Hay manifestaciones en todo el territorio panameño.

El día 22 de octubre, en Colón, miles de ciudadanos salieron a manifestarse, el gobierno respondió con una violenta represión que ha provocado una respuesta popular nacional.

En una convocatoria de diversas organizaciones, el 25 de

octubre organizaciones se realizaron manifestaciones en todo el país. En la ciudad de Colón se cerró la entrada y la salida. Además, el movimiento indígena Congreso General Ngábe-Buglé, en la comunidad de San Félix, provincia de Chiriquí, se unió a la exigencia de la derogación de la Ley 72.

Contingentes de obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUTCyS) cerraron la vía Interamericana en dos puntos de la provincia de Colón.

Un representante del Frente Popular, denuncia: «Escuchamos los testimonios del ensañamiento policial. Balazos a esposados, rociamiento de gasolina en el cuerpo de un detenido, botazos en la cara a un ciudadano apostado en el suelo, gas lacrimógeno dentro de casas para forzar a las personas a salir de ellas». Y finaliza diciendo que «esto no se puede quedar así».



A fines de setiembre Europa se sacudió

Tomado de Antonio Martins

En los últimos tres días de setiembre gigantescas manifestaciones tomaron Madrid, Lisboa, Atenas y París. Denunciaron el secuestro de la democracia convirtiéndola en un ritual teórico y abren un otoño de luchas contra la oligarquía financiera. Decenas de millares de personas, se reunieron en España, Portugal, Francia y Grecia. Protestaban contra el desmantelamiento del Estado de bienestar social europeo, materializado en nuevas medidas que restringen derechos y servicios públicos. Al contrario de lo que marcaban las protestas de masas en el siglo XX, el impulso de convocatoria no fue lanzado por los partidos políticos. La articulación autónoma, con uso intenso de internet, fue un componente decisivo en todos los países. Las multitudes no se limitaron a rechazar la política tradicional. Señalaron que pretenden lanzarse al rescate de la democracia, exigiendo que las instituciones respeten la voluntad popular. Esta reivindicación – simple y factible, pero, capaz de cuestionar radicalmente el secuestro de la política por los mercados – puede abrir avenidas largas para la búsqueda de alternativas.

Madrid.



Decenas de millares de personas fueron a la Plaza Neptuno, para cercar el Parlamento español.

La secuencia de manifestaciones fue cerrada por una asamblea de la que salieron decisiones que reflejan la ampliación de la base social del movimiento: Renuncia de los políticos que son cómplices del «secuestro de la soberanía popular» e inicio de un «proceso constituyente», dimisión del gobierno del primer-ministro Mariano Rajoy. Se convoca un nuevo cerco al Congreso en noviembre, para bloquear la votación del Presupuesto del Estado para 2013, que «dedica mucho más dinero para pagar una deuda ilegítima que a las necesidades sociales».

Lisboa: desafío a la troika y preparativos para huelga general



Por segunda vez en dos semanas, el centro de la capital fue tomado por decenas de millares de personas. El llamado fue hecho por una central sindical: la CGTP, el presidente de la central anunció planes para convocar, en las próximas semanas, una huelga general, con objetivos semejantes

a los de los colectivos españoles: Bloquear la aprobación de un presupuesto que elimina derechos sociales para privilegiar el pago de impuestos a la oligarquía financiera.

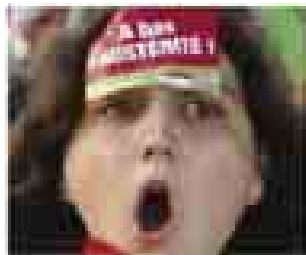
Atenas: 90% contra el nuevo gobierno. Emergen prácticas de autonomía



Cerca de 35 mil personas salieron a las calles en Atenas, y 15 mil en Tesalónica, en el norte.

Investigaciones de opinión muestran que 90% de la población considera los programas de cortes de derechos y servicios públicos «injustos» y «enfiliados contra los más pobres». También revelan que, en un eventual nuevo pleito, sería victoriosa la Syriza (la «Coalición de Izquierda Radical»),

París: donde los nuevos movimientos y la izquierda tradicional ya se unen



Fue convocada en conjunto por partidos (en especial, Partido de Izquierda, Partido Comunista, Nuevo Partido Anticapitalista), sindicatos y una constelación de cerca de 60 movimientos asociativos (entre ellos, ATTAC, Memoria de las Luchas, Defendamos el Feminismo, Economistas Escandalizados, Marcha Mundial de las Mujeres, Marchas Europeas contra el Desempleo). Jean-Luc Mélenchon, el candidato del Frente de Izquierda a las elecciones presidenciales de este año, fue uno de los personajes destacados en la marcha. Eso no parece estar incomodado, ni reducido el protagonismo de las decenas de organizaciones participantes

Europa: falta mucho para salir del letargo. Pero, la caminata, al fin, comenzó

Hay nuevas convergencias entre dos galaxias de la lucha anticapitalista que han dialogado poco, en la mayoría de los países. De un lado, están hoy los movimientos que priorizan la crítica profunda al sistema político institucional (como los Indignados). De otro, las organizaciones que, formando parte de este sistema (los partidos de izquierda, por ejemplo), luchan, dentro de él, para revertir las orientaciones adoptadas por la troika y por los gobiernos europeos.

En octubre continuó sacudida

Portugal

El 15 de octubre miles de manifestantes se concentraron a la entrada del Parlamento para protestar contra la extensión de recortes presupuestales y el aumento de los impuestos presentes en el presupuesto para el año próximo.

Italia



El 27 de octubre se realizó la jornada nacional contra el gobierno bajo el lema «Un día sin Monti».

Cerca de 150 mil reclamaron contra las medidas de austeridad como el incremento del IVA y los recortes a la sanidad y a la educación.

«Con la Europa que se rebela, echemos al Gobierno Monti» se leía en la pancarta que abría la manifestación. Los participantes gritaron consignas contra una política que «solo ha generado despidos y precariedad». «No a las contrarreformas liberales, ni de hoy ni de mañana. No a la Europa de los pactos de estabilidad, del pacto fiscal, de la austeridad y del rigor, que devastan desde hace años Grecia y ahora Italia».

Entre los participantes también se encontraban enfermos crónicos que pedían mayores recursos para la asistencia sanitaria a domicilio, así como personas afectadas por los terremotos en Emilia Romagna que se sentían abandonadas por el Gobierno. Anteriormente, el 20 de octubre, centenares de militantes de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la principal central sindical del país, también se habían congregado en el centro de Roma para pedir «empleo antes que nada», en ella, la dirigente Susanna Camusso dijo «La política de austeridad y de rigor (del gobierno de Mario Monti) no sólo es un fracaso sino que es la gran culpable de las dificultades de este país». La CGIL anunció que se movilizarán de nuevo el 14 de noviembre junto con las grandes organizaciones sindicales europeas.

Gran Bretaña

El día 20 en Londres se reunieron 150 mil manifestantes para protestar contra las medidas de austeridad anunciadas por el Primer ministro David Cameron. Más de 250 autobuses trasladaron a manifestantes hasta Londres.

«La austeridad no sirve. Son los pobres y los más vulnerables los que pagan», denunció Brendan Barber, secretario general del Trades Union Congress (TUC), confederación que reúne a 54 organizaciones. También hubo manifestaciones en Escocia e Irlanda del Norte.



Senado uruguayo despenaliza el aborto

El presidente José Mujica deberá promulgar una polémica ley que despenaliza el aborto, aprobada ayer con aplausos del público en el Senado, tras su tramitación el mes pasado en la Cámara de Diputados.

Los aplausos provocaron que el público fuera desalojado del recinto.

La norma, denominada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue aprobada por 17 votos del gobernante Frente Amplio (FA) y del legislador Jorge Saravia, del Partido Nacional. Hubo 14 votos de los senadores de oposición.

Fuentes parlamentarias aseguraron que Uruguay se convirtió así en el primer país latinoamericano en despenalizar el aborto, luego de Cuba.

En realidad, la medida contaba desde hace tiempo con los votos necesarios y se esperaba su aprobación el pasado martes, pero la votación fue postergada para hoy a pedido de delegados de los opositores partidos Nacional y Colorado.

La senadora Mónica Xavier, presidenta del FA, dijo al respecto que la discusión ya no podía dilatarse más y que era tiempo de que el Parlamento resuelva, luego de que se haya tratado en varias legislaturas anteriores con aprobaciones parciales en las distintas cámaras.

El tema está en debate desde hace más de 25 años, habiéndose presentado siete proyectos de ley en este sentido.

El senador del PN Jorge Larrafiaga, quien votó en contra, anunció que iniciará gestiones para derogar la ley, mientras otros de esa colectividad recolectarán firmas para «convocar un plebiscito derogatorio».

En la anterior legislatura (2008), se aprobó una ley similar, pero el entonces presidente Tabaré Vázquez, también del FA, vetó el artículo referido al aborto.

Tras décadas de extracción minera de uranio, el pueblo Navajo lucha contra el legado de la contaminación

La minería de uranio en Nuevo México tiene una larga historia. Su extracción es realizada en territorio indígena y proporciona combustible para la industria nuclear. La región también almacena gran parte de los desechos mineros y residuos radiactivos de la producción de armas nucleares y centrales eléctricas. Analizamos el impacto devastador que la minería de uranio sigue teniendo en el territorio indígena con Leona Morgan, de la organización «Diné Navajo oriental contra la minería de uranio», dedicada a la protección del agua, el aire, la tierra y la salud de las comunidades que viven en áreas afectadas por la extracción de uranio. También nos acompañan Jay Coghlan, del observatorio nuclear de Nuevo México, y el ex investigador del laboratorio nacional de Los Alamos Chuck Montaño.

Matanza de indígenas K'iche' en Totonicapán, Guatemala



En la madrugada del 4 de octubre, fuerzas del ejército atacaron una manifestación pacífica de mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos K'iche'.

La protesta fue organizada por miles de indígenas pertenecientes a 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, la que bloqueó tramos de la carretera interamericana.

Las demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las reformas constitucionales así como la extensión de la carrera magisterial, tres peticiones respaldadas por el movimiento popular nacional. El Consejo Político 13 Baktún indica que el sector empresarial obtiene grandes ganancias con tarifas abusivas aprovechando los ríos para obtener energía; que la reforma magisterial pretende profundizar la privatización de la educación y que la reforma constitucional del Presidente busca favorecer a grandes empresarios y eliminar derechos indígenas.

Cuando la toma se manifestaba de manera pacífica y mientras los representantes comunales estaban a punto de iniciar una reunión con una comisión especial en la ciudad de Guatemala para negociar los puntos antes mencionados se desató una ola de represión, en las inmediaciones de lo que se conoce como Alaska en la aldea Pasajok. Un camión comenzó a disparar a quemarropa a quienes se manifestaban. El resultado fue de 7 muertos y más de 40 heridos de los cantones de Chiyax, Quiaquix, Pasajok y Vásquez.

Un manifiesto de una amplia red de organizaciones sociales de Guatemala observó que el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por usar armas de guerra en acciones de control civil.

Exigen la desmilitarización de las fuerzas de seguridad, el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública, derogar el decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y se retomen los acuerdos de paz, «en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática - AFPC-». En la operación se violó el acuerdo de paz firmado con la guerrilla el 29 de diciembre de 1996, el gobierno firmó los Acuerdos de Paz, que terminaban un conflicto de 36 años.

Finalmente, llamaron a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen las prácticas autoritarias y se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica, que corresponden a una cultura democrática en el marco del estado de derecho.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó la masacre.

Hay que señalar son los militares quienes gobiernan Guatemala, enmascarados como «gobierno elegido» en forma parecida al Perú actual pero más intensa.

La fiscalía denuncia al coronel Juan Chiroy Sal como el principal culpable.

Ha habido pronunciamientos de solidaridad con las víctimas y de condena a la agresión, tanto de Guatemala como de varios países del mundo.

El documento de apoyo impulsado por el antropólogo Stefano Varese y firmado por 320 personalidades y 27 organizaciones internacionales, dice «A nuestro criterio, la forma como procedieron las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala muestra claramente que este tipo de «operaciones» sigue respondiendo a políticas de contrainsurgencia, de las que tanto Otto Pérez Molina (Presidente) como Mauricio López Bonilla (Ministro de Gobernación) tienen vasta experiencia (ambos son

exmilitares). Ello implica la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales a todo nivel, sean indígenas, campesinas, estudiantiles, etc. En lo que va de su mandato, se ha comprobado que el ministro de Gobernación reacciona inmediatamente con violencia indiscriminada, sin buscar medios de negociación que respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto el derecho a la libre locomoción que insistentemente demandan las élites económicas, como los derechos de organización y defensa de la vida que son reclamos justos de las entidades colectivas que se manifiestan públicamente. En sus declaraciones públicas, Mauricio López Bonilla ha acusado a los movimientos sociales de ser «criminales» y «terroristas», en un afán de desvirtuar las luchas de esos movimientos y como justificación para su acción represiva. Reiteradamente ha dicho que no va a tolerar cualquier intento de atentar contra el «orden público» y la «anarquía», pero nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el señor López Bonilla por «orden» y «anarquía»? Para él, el «desorden público» y la «anarquía» empiezan cuando los estudiantes se organizan en contra de las medidas autoritarias del Ministerio de Educación o cuando las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos fundamentales. Con esto, claramente vemos cómo la política de seguridad del Estado tiene al movimiento popular como un «enemigo interno» al que hay que controlar y eliminar». Por esta razón exige que se destituya a los ministros de Gobernación y Defensa Nacional, que se sancione a los culpables y que se respete a las poblaciones indígenas.

El mundo: 30 millones más de desocupados que en 2008

El número de los desocupados en el mundo aumentó en 30 millones en comparación con 2008, año en que se desencadenó la crisis financiera global, informó hoy la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Entre los que tienen empleo, 900 millones de personas cobran menos de dos dólares diarios, lo que las sitúa por debajo del límite de la pobreza. El desempleo es principalmente juvenil. Un tercio de los más de 200 millones de desempleados hoy son menores de 25 años.

Los mineros sudafricanos ganan la batalla y logran mejoras laborales

Los huelguistas de la mina de platino de Marikana lograron entre un 11 y un 22 por ciento de aumento salarial en un acuerdo firmado con la transnacional británica Lonmin tras casi seis semanas de un conflicto que conmocionó a Sudáfrica cuando la policía dio muerte a 34 mineros el 16 de agosto. El acuerdo concluido luego de más de tres difíciles semanas de negociaciones estipula que todos los empleados reanuden su trabajo y prevé entre un 11 y un 22 por ciento de aumento salarial. "Estamos muy contentos de anunciar la conclusión de esta difícil negociación", declaró a la prensa Abey Kgotle, director ejecutivo para los asuntos generales. Señaló el hecho de que todas las partes firmaron el acuerdo, Lonmin y cuatro sindicatos, entre ellos la poderosa federación minera NUM y los combativos AMCU. Kgotle rechazó que se haya creado un precedente per-

nicioso para el resto de la industria minera o para el sector del platino, y justificó "medidas extraordinarias adoptadas como respuesta a una situación extraordinaria".

En total 45 personas murieron desde que comenzó la huelga en Lonmin el pasado 10 de agosto.

"La firma de este acuerdo abre un nuevo capítulo y hace patente todo el trabajo que queda por hacer para transformar y cambiar la vida de la clase obrera en Sudáfrica", comentó el representante del sindicato AMCU, que alentó la huelga, Joseph Mathungwa. "Cuando miras el acuerdo, se hubiera podido conseguir sin todos esos muertos".

El acuerdo incorpora aumentos salariales para los 24.000 de las 28.000 personas que emplea Lonmin. El sector minero es el pulmón económico del país y contribuye al 9 por ciento del PIB o el 19 por ciento si se le incluye todas las actividades anexas.



¡COMA COCA, HACE BIEN... Y ES LEGAL!

¿Cómo?

Productos Integrales

Galletas, galletitas, crocantes

Lechitos, maquiños, fideos

Jarros energéticos, empanaditas

zeta, néctar y otros

Empleados con marcas de COCA, MACA,

QUINUA, TAMBO, KWACHA y otros



¿Dónde?

Centro de Terapias y Belleza

Terapias de sanación, danza

curso y talleres de tratamiento

personal, ceremonias de medicina

rituales ancestrales, servicio

de restaurante



Jirón Napo 1636 - Breña - Telef. 4310507

España: preparando la Huelga General del 14 de Noviembre



Por: Pepe Mejía, desde Madrid

Mientras el Rey decía que las políticas económicas del Gobierno daba sus frutos, una persona se suicidaba para evitar el desahucio de su local. Mientras crecen las desigualdades en la España del espermato, la ciudadanía redobla las movilizaciones y prepara la jornada de Huelga General para el próximo 14 de noviembre.

En la India, el mismo día que el rey Juan Carlos decía que las políticas del Gobierno de Rajoy estaba dando resultados, en España se ahorcaba en su domicilio de Granada José Miguel Domingo que estaba a punto de ser desahuciado. Y en Burjassot, Valencia, Manuel G. se lanzaba al vacío -está fuera de peligro- momentos antes de que la procuradora llegara a su vivienda con la orden de desahucio. Cada día más de 243 españoles intentan suicidarse desesperados por la crisis.

Otra imagen que acerca a la realidad. Una anciana se acercó al príncipe Felipe cuando salía este de un templo y le pidió una limosna. El hijo del rey desplegó la mejor de sus sonrisas y le dió la mano. Es lo único que pueden ofrecer. Mientras miles de ciudadanos se lanzaban a la calle a protestar por los recortes y rodeaban el Congreso sus señorías votaban tres cosas fundamentales: una propuesta para el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies; una mejor distribución de las retribuciones que perciben los políticos (una bajada de sueldo); y una propuesta de lucha contra el fraude fiscal. Las 3 fueron rechazadas. En Castilla La Mancha la Presidenta, Dolores de Cospedal, ha eliminado de los presupuestos de 2013 los sueldos de los diputados. El ahorro será de 1 millón de euros. Mientras tanto, solo los 41 asesores de la presidencia de Castilla-La Mancha cuestan 1.644.140 euros. El presidente de los técnicos de Hacienda defiende que hasta ahora los ajustes han recaído sobre clases medias y desfavorecidas, y que una buenas medidas contra el fraude fiscal lograrían recaudar hasta 38.500 millones de euros. Todavía existe un sector social, el de los grandes patrimonios, que se sigue librando de las subidas impositivas que desde mayo de 2010 vienen planteando los Gobiernos. A todo esto los responsables de los desfalcos, como los exdirectivos de las cajas gallegas, se aferran a sus millonarias indemnizaciones. Ahora son jubilados de oro.

LOS RESPONSABLES DE LA CORRUPCIÓN DISFRUTAN DE JUBILACIONES DE ORO

En las partidas de los presupuestos se refleja claramente los objetivos de este Gobierno. Defensa se lleva 5.786,01 millones de euros; Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 7.903,4. Esos dos conceptos suman

13.689,01. Mientras que Sanidad 3.852,27, Educación 1.944,73 y Cultura 721,71, suman 6.518,71. La diferencia entre lo primero y lo segundo es de más de 7.000 millones de euros (en concreto 7.170,30).

Después del 25S la represión contra la protesta social ha dado un salto cualitativo. Ahora te llevan a la Audiencia Nacional por reunirte en un parque.

Dentro de las múltiples movilizaciones y conflictos laborales destaca la del diario El País. El Comité de empresa amenaza con 18 días de huelga y ha reprobado a su ex director y fundador, Juan Luis Cebrán al que "exigen que devuelva buena parte de los millones de euros que ha cobrado en los últimos años".

En octubre, el Gobierno ha utilizado la hucha de las pensiones: 1.700 millones del fondo de reserva de la Seguridad Social. También en este mes hemos conocido las previsiones del FMI. España y Grecia estarán a la cola del mundo. El FMI calcula que el PIB bajará el 1,3%, casi el triple de lo que dice el Gobierno. El desempleo seguirá subiendo el año próximo y superará el listón del 25%.

Los servicios sociales ya atienden a más de ocho millones de personas. Los usuarios de la asistencia pública se incrementaron un 20% de 2009 a 2010. En dos años el presupuesto para ayudas de emergencia ha caído un 65,4%.

En la actualidad, uno de cada cuatro españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, algo que está afectando especialmente a los menores de 16 años, cuya tasa de pobreza ha aumentado del 23,3% en 2009 al 26,5% en 2011, según UNICEF. 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros en el desempleo, en 500.000 viviendas no entra ningún ingreso y hay más de 300 desahucios diarios, según el Poder Judicial, mientras se sigue dando dinero para rescatar la banca. El 40% de los mayores ayuda a un familiar o amigo. Dos de cada tres familias no tienen margen para pagar gastos imprevistos. España es el país de la eurozona donde más ha crecido la desigualdad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 21,1% de la población española está por debajo del umbral de riesgo de la pobreza que, para un hogar con dos adultos y un menor de 14 años, es de 13.238 euros. Con datos del Banco de España, las familias han perdido más del 16% de su riqueza financiera (efectivo, depósitos, acciones...) en relación a hace un año. En los veintisiete, es el país con más distancia entre rentas altas y bajas.

España sufre -hasta septiembre pasado- la mayor caída de poder adquisitivo en 27 años. Los sueldos suben un 1,3% hasta septiembre mientras los precios crecen un 3,4%. En España han cerrado 67 medios desde el co-

mienzo de la crisis. La caída en inversión publicitaria es del 20%. Desde noviembre de 2008, un total de 7.918 profesionales de la información (no sólo periodistas) han perdido su empleo.

LOS INMIGRANTES REGRESAN EN MASA A SUS PAÍSES DE ORIGEN

Por otro lado, la tasa de desempleo de los inmigrantes es el 35%; entre los autóctonos, un 22%. El 72% de los ecuatorianos que viven en España quieren regresar a su país.

Los recortes elevan la demora para operarse un 125% en año y medio. El número de pacientes que aguarda más de 180 días para entrar en quirófano crece un 178%. Cine, teatro y conciertos pagan ahora el mismo IVA que un gin-tonic.

Ante este panorama el Gobierno se enroca y se blindó. Aumenta la represión y los abusos. La policía no quiere que se les tome fotos mientras ejercen su derecho a emplear la violencia contra manifestantes. A pesar de la represión las movilizaciones se multiplican.

En la semana del 22 de octubre en Madrid hubo más de 81 concentraciones, 46 sólo el viernes 26. Según un sondeo realizado por Metroscopia -entre el 25 y 26 de octubre- un 40% de españoles con trabajo (que son quienes pueden optar por ir o no a la huelga) se muestran dispuestos a secundar la huelga convocada para el próximo 14N. La mayoría de los encuestados -un 62%- cree que la movilización del próximo mes está más que justificada. El objetivo es preparar la huelga del próximo 14N.

Las ejecuciones hipotecarias, una de las señas de la actual crisis, están causando una sangría social, según el juez decano de los Juzgados de Valencia, Pedro Luis Víguer. Sin embargo las movilizaciones han frenado más de 140 desahucios desde junio de 2011.



Marcha de los indignados impuso su voz en Colombia

Bogotá, 13 oct (PL) Miles de colombianos salieron a las calles de esta capital para cerrar una semana en que diversos sectores de la sociedad enarbolaron reclamos a favor de la paz y contra las inequidades sociales como la pobreza, la exclusión y la crisis de la educación y la salud. (RadioPL)

Convocada por 116 organizaciones sociales y populares, la marcha abarcó la víspera un amplio espectro en el que confluieron campesinos, indígenas, mineros, estudiantes, profesionales y desempleados, movilizándose pacíficamente en 25 de los 32 departamentos colombianos.

En Bogotá, la marea humana se encauzó, mediada la mañana, desde 10 puntos de la ciudad, entre ellos el Parque Nacional, para avanzar hacia el punto de concentración previsto, la Plaza Bolívar.

Durante el trayecto se incorporaron grupos de encapuchados, que los marchantes calificaron de infiltrados, quienes desencadenaron disturbios lanzando artefactos de fabricación casera.

Los grupos antimotines de la policía lanzaron bombas aturdiras y gases lacrimógenos contra los manifestantes y, pese a las prohibiciones expresas del alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, continuaron haciéndolo en las proximidades de la Plaza Bolívar. Líderes estudiantiles y sindicales repudiaron los ataques de los encapuchados y en varias ocasiones se arrojaron en la vía pública gritando: «¡No con violencia!», tras asegurar que los encapuchados eran infiltrados, que cumplían funciones específicas.

En la Plaza del Rosario, en las cercanías del Museo del Oro, funcionarios distritales atendieron a varias personas afectadas por los gases, entre ellas un anciano herido en la cabeza y una fotógrafa de un medio alternativo, con una esquirola en un muslo.

Varios manifestantes, que prefirieron reservar su identidad, aseguraron a medios de prensa que los infiltrados actuaron con una intención definida: desvirtuar la naturaleza pacífica de la marcha y sus objetivos, mientras fuentes del gobierno persistían en asegurar que las

garantías estaban dadas para el libre ejercicio del criterio.

La Alcaldía bogotana ordenó una investigación para comprobar si se registraron abusos de la fuerza pública, como lo reflejaron las cámaras e imágenes transmitidas en directo por la televisión. Las grandes mayorías desfavorecidas

de la población colombiana salieron a las calles a reivindicar sus derechos y a defender una paz con justicia social y soberanía en cuyo diálogo -próximo a concretarse entre las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP y el ELN, y el gobierno, en Oslo, Noruega- quieren que su voz tenga también eco.

